



# El colapso de Venezuela ¿qué sigue?

Margarita López Maya

*Los regímenes autoritarios que llevan al colapso del Estado,  
haciéndolo incapaz de proveer bienes públicos, colapsan.  
Sorprendentemente esto no ha sucedido en Venezuela, pero ello no  
significa que el régimen de Maduro no vaya a colapsar  
(Steven Levitsky, citado en Hernández, 2018).*

Para fines de febrero de 2018, la situación en Venezuela no podía ser peor. Analistas, académicos, observadores y agencias internacionales, gobiernos de la región, actores sociales y políticos diversos y de distintas ideologías, salvo las excepciones representadas por una porción de la izquierda de filiación procubana, ya reconocían que estaban instaladas todas las piezas que hacen de Venezuela un país sumido en una catástrofe sin precedentes y a la cual no parece encontrarse salida. Muchos consideraban, adicionalmente, que la concurrencia de esta situación crítica en todo ámbito de la vida en sociedad tenía pocos antecedentes, al menos en América Latina.

Tres meses después, en mayo, se celebraron elecciones presidenciales, convocadas con premura y anticipadamente por una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el presidente Nicolás Maduro y elegida fraudulentamente en julio de 2017, contraviniendo los principios más elementales de un régimen democrático. Al cierre de este artículo, a fines de ese mes, la crisis venezolana seguía su camino al abismo.

En este artículo busco, por una parte, mostrar con datos y cifras confiables, la situación socioeconómica catastrófica que sufre la sociedad venezolana, que enmarca y condiciona la crisis política. En segundo lugar, exponer los principales y más recientes desarrollos políticos que describen, tanto el continuo avance del carácter autoritario del régimen y su vocación totalitaria, como las características del proceso electoral presidencial fraudulento que se realizó el 20 de mayo de 2018. En una tercera parte, reflexiono sobre posibles estrategias y acciones que podrían favorecer una transición democrática.

Este ensayo está sustentado en una larga investigación sobre el proceso sociopolítico venezolano, que inicié en los años noventa del siglo pasado. He publicado resultados generales de esta pesquisa en dos libros (López Maya, 2005 y 2016) y en numerosos artículos académicos<sup>1</sup>. Las citas aquí se han reducido al mínimo, sugiriendo al lector buscar el detalle de los soportes documentales, bibliográficos y hemerográficos en los dos libros mencionados. Estudios coyunturales de mi autoría han sido publicados en diversos portales. De ahí también he extraído algunos textos, que serán citados cuando corresponda.

## La catástrofe sin fin<sup>2</sup>

Para quienes vivimos en Venezuela y permanentemente monitoreamos la situación socioeconómica y política, volver sobre las cifras de la catástrofe económica y social que padecemos parece reiterativo. El desastre económico tiene años a la vista: inflación creciente, retroceso sostenido del PIB, caída de las reservas internacionales, un sistema de tasas de cambio carente de toda racionalidad económica. Los indicadores macroeconómicos llevan al menos cinco años en regresión (ver Cuadro N° 1). Lo nuevo es la hiperinflación, habiendo cerrado el

año 2017 con una cifra superior al 2.500%, lo que pronostica para este año, de seguir las mismas políticas del equipo de Maduro, como es la situación todavía en mayo, que la inflación estará en una cifra sobre los seis dígitos (Guerra, 2018).

**Cuadro N° 1**  
Cifras Macroeconómicas 2005-2017

Años	Variación del PIB	Variación interanual de inflación	Reservas internacionales Millones de \$	Tipo de cambio Bsf. X \$
2005	10,3	14,4	30.368	2,15*
2006	9,9	17,0	37.440	2,15
2007	8,8	22,5	34.286	2,15**
2008	5,3	31,9	43.127	2,15
2009	-3,2	26,9	37.830	2,15
2010	-1,5	27,4	30.332	a) 2,6*** b) 4,3 c) 5,3
2011	4,2	29,0	29.892	a) 4,3 b) 5,3
2012	5,6	19,5	29.890	a) 4,3 b) 5,3
2013	1,3	52,7	21.481	a) 6,3**** b) 11,5
2014	- 3,9	68,5	22.080	a) 6,3 ***** b) 11,33 c) 66,16 d) Negro ¿?
2015	-5,7	180,9	16.370	a) 6,3 ***** b) 13,5 c) 900 d) Negro ¿?
2016	-16,7+	511,3++	10.977	a) 10***** b) 674 c) Negro ¿?
2017	-15+++	2.616+++	9.524	a) 10 b) 3.345 c) +100.000

Fuente: BCV y Monedas de Venezuela (2017).

\* Devaluación frente al dólar ocurrida en marzo. Precio anterior del dólar Bs. 1.920.

\*\* Fue este año cuando se eliminaron tres ceros al bolívar y se convierte en bolívar fuerte (BsF).

\*\*\* En enero se establecen dos tipos de cambios. Se devalúa el BsF a 2,6 por \$; y se crea otro a BsF. 4,3 por \$. En junio se establece un tercero SITME (c) a BsF. 5,3 por dólar. En diciembre se unificaron los dos primeros a una sola tasa de BsF. 4,3.

\*\*\*\* Nueva devaluación frente al dólar a partir de febrero. En marzo se crea el SICAD, el cual es una subasta a través de la cual personas naturales y jurídicas postulan sus peticiones para la adquisición de dólares. Se prohíbe divulgación del precio del dólar del SICAD. El monto b) en el cuadro es un promedio al mes de octubre.

\*\*\*\*\* Creación de un tercer tipo de cambio frente al dólar a partir de febrero. Ahora hay dólar preferencial, SICAD I, SICAD II y mercado negro.

\*\*\*\*\* Se anuncia en enero nuevo sistema cambiario. Continúa el preferencial (dólar CADIVI), se fusionan SICAD I y II, ahora se llama sólo dólar SICAD. Precio para noviembre. Se crea dólar SIMADI, que fluctúa de acuerdo a un sistema de oferta y demanda. Precio del dólar SIMADI para diciembre BsF. 900.

\*\*\*\*\* Se coloca el preferencial (DIPRO) en Bs. 10 X \$. El SIMADI pasó a llamarse DICOM y fluctúa, iniciándose en febrero en Bs. 200. La cifra del cuadro es de diciembre.

+ Estimación de Torino Capital

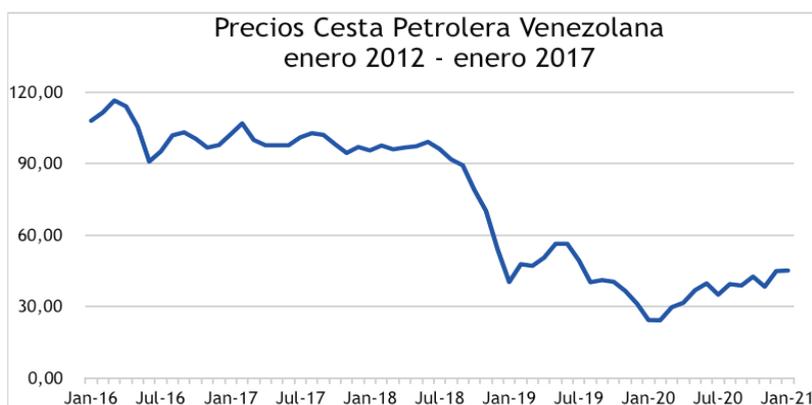
++ Estimación de Datanálisis

+++ Estimación de la Asamblea Nacional

Este cuadro debe complementarse con el desempeño del precio del barril petrolero en el mercado mundial, desde hace años en declive

o estancamiento (Gráfico N°1). A la disminución de los precios del petróleo, se suma también una destrucción de la empresa estatal petrolera PDVSA. En los últimos meses ha decrecido de manera cada vez más rápida su producción, agobiada por una nómina poco profesional, que se ha triplicado en la era chavista, así como por onerosos desvíos de recursos para satisfacer criterios paternalistas, clientelares y escandalosas corruptelas. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), al cierre de 2017 la producción venezolana cayó a 1,621 millones de b/d, siendo que en agosto aún producía 2,1. Cuando Chávez llegó al poder en 1999 Venezuela producía sobre los 3,5 millones de b/d. Así, aunque en 2018 el precio se ha recuperado, no surte su efecto de otros tiempos, pues la producción sigue disminuyendo<sup>3</sup>.

Gráfico N° 1



Fuente: MPPYM, cálculos Luis E. Lander.

El colapso económico precipita el social, que en 2017 mutó a crisis humanitaria declarada así por la Asamblea Nacional (AN), pero no reconocida por el Ejecutivo. La pobreza en 2017, a falta de estadísticas oficiales, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI), desarrollada por tres universidades venezolanas, afecta a más del 87% de las familias, la miseria al 61% (España y Ponce, 2018). La desigualdad se ha ensanchado y se vive como herida punzante. Vemos niños, adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, hombres, escarbando en la basura, mientras unos pocos, que

poseen divisas, bien de manera legítima, o porque son altos funcionarios del gobierno y/o militares del régimen, se gozan la vida en medio de abundancias que obtienen a precios risibles cuando se calculan a dólar paralelo.

Junto a la hiperinflación, está el desquiciante sistema cambiario, establecido desde 2003, que cambia las regulaciones constantemente y con criterios crecientes para controlar toda actividad económica. En enero de 2018, el gobierno eliminó la tasa *Dipro*, que vendía la mayoría de las divisas que controla el Estado -el casi único receptor de divisas en el país- a Bs. 10 por dólar. Sometió a subasta la otra tasa oficial *Dicom*, que cotizó en mayo el dólar a Bs. 78.750 por dólar<sup>4</sup>. Por esa fecha la tasa de cambio del dólar en el mercado negro superaba los Bs. 930.000, haciendo del negocio de comprar dólares uno de los más lucrativos para quienes por sus relaciones con la cúpula militar y civil gobernante, pueden acceder al dólar oficial y venderlo en el mercado paralelo.

Niños y adolescentes abandonan las escuelas, por carecer de un mínimo de condiciones para estudiar, empezando por la comida. De acuerdo con Cáritas de Venezuela, en 2017 se duplicaron los niños con desnutrición con respecto al año anterior (Informe21.com, 2018). Ya en 2016 se ubicaba la carestía de alimentos básicos por encima del 70%. La escasez de medicinas se sitúa en la actualidad sobre el 80%, según Convite (El Nacional, 2018), y a diario redes sociales, que permanecen fieles al derecho a informar, dan cuenta de la crisis del sector de la salud pública al registrar las continuas muertes por falta de nutrientes para recién nacidos en los hospitales, o por ausencia de tratamientos para recién paridas, medicinas y equipos para enfermos con padecimientos crónicos, y otros con distintas vulnerabilidades en salud.

Esta situación se ahonda por el indetenible crecimiento de la violencia social. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, la tasa de homicidios bordea los 90 por cada 100.000 habitantes desde 2015 y Caracas se ha convertido en la capital más violenta del planeta (OVV, 2018). Provea, por su lado, lleva el seguimiento de la violencia y abusos ejercidos dentro del Plan de Seguridad *Operación Liberación del Pueblo*, el cual no ha disminuido la violencia, pero, en cambio, sí ha acrecentado la violación a los derechos humanos, particularmente de los más pobres. En estos operativos intervienen cuerpos de seguridad civiles y militares, ocurren de madrugada en los barrios populares, sin

que a la fecha exista documento oficial con sus metas y metodología. Entre julio de 2014, cuando se inauguró, y febrero de 2015, las cifras oficiales daban cuenta de 245 víctimas y 2.310 detenidos. Provea, por su parte, contabilizó más de 700 víctimas a inicios de 2016. Las autoridades alegan supuestos enfrentamientos con *malandros* y delincuentes. Sin embargo, la desproporción entre civiles fallecidos y agentes es sospechosa, lo que robustece las denuncias de familiares de víctimas, quienes alegan se trata de asesinatos en su mayoría. Coinciden también los familiares en denunciar que durante estos operativos se cierran las calles y los agentes entran a las casas sin órdenes judiciales y encapuchados, torturando, robando y cometiendo todo tipo de abusos (García Marco, 2016).

El colapso del Estado para controlar la violencia se vive también en el sistema penal. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el promedio anual de muertes violentas entre 2014 y 2017 fue de 468. Desde 2011, se han producido motines con masacres en penitenciarías como El Rodeo, Mínima de Tocuyito, La Planta y Uribana. Los datos de 2017 de OVP y de Una Ventana a la Libertad de UVAL desmienten los discursos oficiales sobre supuestos éxitos en materia carcelaria en documentos elevados a la Corte Interamericana de DDHH y la Evaluación Periódica Universal (EPU) en la ONU (Provea, 2018).

Adicionalmente, la combinación de la destrucción de los mecanismos de mercado con la falta de contrapesos institucionales sobre los poderes públicos, funcionarios y fuerzas armadas, dejó expuesto al Estado para ser penetrado por todo tipo de negocios ilícitos<sup>5</sup>. Entre los muchos casos que resaltan está el de los sobrinos de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron apresados en un operativo encubierto en Haití en 2015, negociando la introducción de 800 kg de cocaína a EEUU. Fueron juzgados y encontrados culpables en un tribunal de Nueva York, donde fueron sentenciados a diecisiete años de cárcel sin libertad condicional. En el juicio, la Fiscalía presentó grabaciones donde los sobrinos afirmaban tener acceso libre para hacer sus envíos a la rampa presidencial en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los EEUU por narcotráfico, al actual vicepresidente Tareck El Aissami, y al ministro de interiores y justicia, Néstor Luis Reverol, son otros casos emblemáticos. Pero hay muchos, muchos más.

Además de droga, otros negocios prósperos se vinculan al sistema de control de cambios múltiples, ya mencionado arriba. El control de precios y subsidios incentiva el contrabando de productos alimenticios básicos, medicinas, electrodomésticos, gasolina, etc., que ocurre en las fronteras con la complicidad de la Guardia Nacional. Así también la adjudicación directa de obras públicas y las corruptelas denunciadas a nivel internacional sobre negocios realizados con contratistas nacionales e internacionales en la petrolera PDVSA, como el caso de la brasileña Odrebrecht. Si bien este tema es extenso, aquí sólo lo resalto como parte de la destrucción institucional del sistema de contrapesos, la anomia y la violación del Estado de Derecho por parte del gobierno, que ha incentivado el nepotismo, el clientelismo y la corrupción a todos los niveles.

Donde mejor se resume la tragedia nacional es en los miles de venezolanos que a diario salen huyendo por las fronteras para enfrentarse al mundo ancho y ajeno, como refugiados de una nación destruida. Ellos vienen creando todo tipo de problemas a los países vecinos, al hacer colapsar servicios públicos, tratar de conseguir empleos, alimentos, vivienda. Venezuela, en definitiva, cayó en el abismo.

La catástrofe venezolana es el producto tanto de estrategias planificadas por una élite de vocación totalitaria y fanatizada, no dispuesta a superar los problemas estructurales de la economía venezolana, como por su ignorancia supina para gobernar. Para esta elite, la lealtad a la autoridad y el fanatismo doctrinario son principios rectores en la conducción de la gestión pública. Sus políticas de control social son denigrantes para un país que vivió la modernización. El *Carnet de la Patria* y las cajas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), últimos programas sociales del gobierno para distribuir bienes básicos a precios regulados a cambio de lealtad política explícita, ilustran su búsqueda de subordinar a la población, manipulándola desde sus necesidades más básicas: comida, salud, ingreso. Son la consolidación de la orientación segregacionista por criterios políticos que se ha venido adelantando bajo el modelo socialista desde los tiempos del presidente Chávez (ULA-IDH, 2018). Es un escenario catastrófico que no puede revertirse sin un cambio político que suponga la caída, no sólo del jefe del Estado y su entorno cercano, sino también de una sustantiva modificación de las fuerzas que hoy conforman el bloque de dominación: una cú-

pula militar y civil unida por delirios pseudo revolucionarios, miedos e intereses particulares, muchos de los cuales consisten en negocios criminales e ilícitos.

## El contexto político: las dificultades de la oposición

El escenario socioeconómico enmarca y condiciona la crisis política. Maduro vive el último año de su periodo presidencial habiendo sobrevivido políticamente, pese a la mayoría de los pronósticos. Esta sobrevivencia ha sido a costa de destruir la institucionalidad democrática del país, implantando mecanismos políticos, instituciones e instrumentos legales para consolidar un régimen autoritario de rasgos totalitarios, afín al modelo cubano, gobierno que lo asesora y es su aliado. No obstante, y aunque la asesoría de Cuba es permanente, la situación venezolana no es idéntica a la de la Cuba castrista. Con una PDVSA postrada y sin la Guerra Fría como contexto internacional, Maduro pareciera carecer de recursos económicos y apoyos políticos suficientes para estabilizarse. La incapacidad hasta la fecha de socavar sus bases de apoyo por parte de actores democráticos configura en lo inmediato, empero, un panorama de alta incertidumbre.

Es también constatable que la resistencia ciudadana, de la sociedad civil y de actores políticos opositores continúa con sus altas y bajas. En los últimos tres años se han producido reflujos en las protestas, fracasos de la oposición en la mesa de negociación, flaquezas de dirigentes opositores, errores de cálculo en los procesos electorales, pero se mantiene encendida la llama de la contestación, la exigencia del cambio político democrático para salir de la tragedia. Los actores opositores siguen ensayando nuevas estrategias, distintas acciones. La gente se desencanta, pero vuelve a activarse. Añádase a este importante ingrediente la creciente preocupación de la comunidad internacional, que emite comunicados, presiones y sanciones, como los de los gobiernos de EEUU, Canadá, el Grupo de Lima y la Unión Europea. La firmeza de esta resistencia hace difícil entender cómo sobrevive un presidente y gobierno tan impopular y cruel, que está cada vez más aislado. Pero estas variables tampoco resultan suficientes para imaginar que por ellas vaya Maduro a caer o negociar su salida en lo inmediato.

Para sopesar la importancia e impacto de esta lucha a continuación describo los hitos más importantes entre 2016 y 2017<sup>6</sup>, lo cual permitirá tener una visión más precisa de las fortalezas y debilidades de la acción prodemocrática, así como de sus actores, además de que servirá para concluir con algunas reflexiones sobre estrategias y acciones factibles en el corto plazo.

Desde fines de 2015, cuando las elecciones parlamentarias dieron una victoria sólida a los partidos opositores reunidos en la MUD, el gobierno fue desarrollando una acción planificada para establecer una dictadura franca. En 2016, el gobierno buscó debilitar al Parlamento que ya no controlaba, usando tanto al Poder Judicial como al Consejo Nacional Electoral (CNE), poderes bajo su control. El mismo diciembre de 2015 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al CNE “desproclamar” a cuatro diputados del estado Amazonas, bajo alegato de haberse cometido en esa entidad un supuesto fraude electoral, despojando a la MUD de la mayoría de 2/3. Con esa mayoría la MUD hubiese podido renovar autoridades de los otros poderes públicos unilateralmente. El procedimiento de desproclamación es inexistente en el tinglado constitucional y jurídico del país, pero no existiendo árbitro neutral en Venezuela, la situación fue acatada ante la amenaza del oficialismo de cerrar la AN por “desacato”.

El proceso de referendo revocatorio presidencial (RRP), por otra parte, activado ese año por los partidos opositores que ahora eran mayoría en la AN, fue dilatado y finalmente suspendido también de manera arbitraria por el CNE, apoyado por el TSJ. Pese a multitudinarias manifestaciones que mes tras mes apoyaron la iniciativa, y la indignación popular que brotó como consecuencia de la suspensión de ese mecanismo constitucional, Maduro mantuvo el control de la situación, apoyado por los cuerpos de seguridad del Estado. También logró que la mesa de negociación, auspiciada por el Vaticano y la Unasur como mecanismo de resolución del conflicto altamente caldeado que por éstas y otras arbitrariedades que se vivieron ese año, lo favoreciera. La oposición avino a sentarse a la mesa, presionada por estos actores internacionales, y concedió, como gesto de buena voluntad, desactivar las protestas de calle, suspender el juicio de responsabilidad política que había iniciado contra Maduro en la AN, y desconvocar la marcha hasta Miraflores que entregaría el resultado de ese juicio, acciones que

el oficialismo temía. Una vez obtenidas estas concesiones el gobierno no modificó su conducta y la mesa fracasó.

Pese a ello no puede decirse que Maduro comenzó fortalecido el 2017. La oposición se debilitó y la calle defraudada se retrajo, pero Maduro no mejoraba su popularidad. Encuestas señalaban una ciudadanía desconcertada y frustrada por el desempeño de los partidos opositores, que parecieron no poder rematar la faena cuando todo pareció favorecerlos.

El 25 y 26 de marzo volvió a atizarse la crisis política. El gobierno, envalentonado, volvió a atacar la institucionalidad, buscando una vez más neutralizar a la AN. Ahora el TSJ emitió dos sentencias: en la primera, despojó de inmunidad parlamentaria a sus diputados, alegando que continuaban en desacato; y en la segunda se sostuvo que mientras continuara ese desacato, el TSJ asumiría las funciones legislativas desde la Sala Constitucional. Con estas sentencias, el quiebre democrático se hizo definitivo y la vocación dictatorial de Maduro emergió diáfana y transparente ante los ojos de la comunidad internacional.

La reacción fue contundente, sonando las alarmas el secretario general de la OEA, ex canciller de Uruguay, Luis Almagro. Asimismo, se dio de nuevo la activación en el ámbito interno de acciones colectivas de apoyo a la AN lideradas por los partidos y otros diversos actores sociales y políticos. En las filas del chavismo la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, hizo público su rechazo a las sentencias y consideró roto el “hilo constitucional democrático”. Se hizo visible una ruptura en el bloque de dominación, hasta entonces muy compacto en su apoyo a Maduro. La presión tuvo por resultado que el 1º de abril el TSJ emitiera dos nuevas sentencias modificando las previas. En ellas, se prescindió de la parte referida a la inmunidad parlamentaria de los diputados y se borró la parte referida a que la Sala Constitucional asumiría las funciones legislativas, o el órgano que ella designara. Sin embargo, todas las otras decisiones tomadas desde 2016 por el TSJ, que superan las sesenta y que anulan los actos que vienen realizándose en el Legislativo, siguen vigentes, incluyendo el desacato que dictó dicha Sala por el supuesto fraude en Amazonas.

En abril, la MUD convocó a sucesivas movilizaciones en Caracas y centros urbanos del país, que fueron respondidas masivamente por la población. Cuatro fueron sus objetivos: la restitución de facultades de

la AN que múltiples sentencias del TSJ le había despojado; el reconocimiento por parte del gobierno de la crisis humanitaria que asola a la población; la convocatoria por parte del CNE a elecciones, restituyendo el derecho al voto después de las suspensiones del RRP y de las elecciones regionales pautadas constitucionalmente para diciembre de 2016; y la libertad de más de 140 presos políticos. Estas protestas, que mantuvieron al país prácticamente paralizado hasta julio, fueron respaldadas por instancias internacionales, interamericanas, gobiernos, cámaras o parlamentos, partidos y diversas ONG del mundo. Particularmente activa en la búsqueda de la restitución de las instituciones de la democracia venezolana siguió siendo la Secretaría General de la OEA.

Las protestas cedieron cuatro meses después, con las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una iniciativa anunciada sorpresivamente el 1º de mayo por Maduro, en medio de un clímax de presiones hacia su gobierno por la combinación de movilizaciones multitudinarias y continuas, y la presión también sostenida de una comunidad internacional crecientemente consternada e indignada, tanto por las condiciones de carestía e inseguridad de la población, como por el creciente nivel de autoritarismo y represión. Provea y el Foro Penal contabilizaron 139 muertes en manifestaciones, la mayoría atribuibles a los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares armados prochavistas. Además, registraron más de 11.900 detenidos, 1.260 presos de los cuales continuaban para octubre más de 400; 15% de ellos sometidos a tratos crueles (Provea, 2018). La situación de los presos políticos continuó agravándose, para mayo de 2018 el Foro Penal registraba más de 345 presos políticos<sup>7</sup>.

Frente a esta convocatoria de ANC, donde el gobierno una vez más torcía la letra y espíritu de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) al no realizar el referendo popular de consulta exigido como requisito previo, las fuerzas democráticas opositoras rechazaron concurrir y como respuesta aprobaron en la AN la convocatoria a la Consulta Popular exigida constitucionalmente. La sesión legislativa tuvo lugar el 5 de julio, fecha de la independencia de Venezuela, en medio de un asalto al Parlamento por fuerzas oficialistas violentas, que contaron con la complicidad de dirigentes del PSUV y fuerzas de seguridad del Estado. La AN fijó la fecha de la Consulta para el 16 de julio. No pudiendo contar con el CNE, decidieron organizarlo

con los partidos, el movimiento estudiantil y la sociedad civil bajo la coordinación de un equipo técnico de la MUD. Por su parte, diligente el CNE de complacer a Maduro, fijó la fecha del 31 de julio para elegir a los miembros de la ANC. Asimismo, el oficialismo elaboró unas bases comiciales violatorias del Estado de Derecho, al establecer criterios sectoriales para votar y al ignorar el derecho de “un ciudadano un voto” en procesos electorales democráticos, siendo que había venezolanos con derecho a dos votos y otros a solo uno.

La Consulta Popular marcó un hito en la lucha política, al organizarse desde la sociedad y al concurrir masivamente los venezolanos, no sólo en el país sino en el exterior. De acuerdo con el anuncio dado por la Comisión de Garantes del proceso, constituido por rectores de universidades nacionales, concurrieron más de siete millones y medio de venezolanos, de los que más de 600.000 depositaron sus votos en las decenas de países donde hoy vive la gigantesca diáspora, que las condiciones provocadas por el modelo socialista chavista ha causado.

El proceso electoral para elegir los miembros a la constituyente exacerbó las condiciones injustas e inequitativas que desde hace ya años prevalecen en los comicios venezolanos. A los abusos, atropellos e ilegalidades de siempre por parte del oficialismo, con la complicidad del CNE, se añadió ahora que los resultados de la votación misma no cumplieron con la pulcritud y transparencia que hasta esa elección se habían cumplido razonablemente. Así pues, el CNE oficializó para este evento una participación de 8 millones de electores, sin que hasta la fecha haya demostrado con la votación en centros y mesas que, en efecto eso fue así. Smartmatic, compañía que diseñó y se responsabiliza por el sistema automatizado de votación, emitió poco después un comunicado distanciándose de estos resultados al denunciar que los resultados numéricos fueron manipulados.

La ANC se instaló inmediatamente y de una vez destituyó a la Fiscal General, institución que se había apartado de la subordinación presidencial, y ordenó al CNE convocar elecciones de gobernadores, las cuales tuvieron lugar el 15 de octubre.

Los resultados de las elecciones de gobernadores fueron sorprendentes. En medio de la peor crisis que haya vivido Venezuela y con un gobierno impopular, ganó el oficialismo dieciocho gobernaciones y la

oposición sólo cinco, cerrándose otro ciclo de la resistencia. El proceso estuvo plagado de irregularidades, ventajismo, violencia y trampas por parte del gobierno y las fuerzas militares y paramilitares que lo apoyan, incluyendo de nuevo irregularidades el propio día de la votación. Como consecuencia, el instrumento electoral parece haber perdido la legitimidad que había tenido hasta 2015 para promover un cambio político democratizador para Venezuela.

La derrota de los partidos democráticos provocó también la división y fragmentación de la MUD como su plataforma unitaria, emergiendo de nuevo el desafío de encontrar una estrategia de lucha política eficaz ante la realidad autoritaria institucional que se ahondaba. Esto no pudo lograrse para las elecciones presidenciales anticipadas que de manera ilegal convocó la ANC respaldada por el CNE, las cuales tuvieron lugar el 20 de mayo de 2018. En ese proceso, los principales partidos de la MUD decidieron no participar, mientras uno de los dirigentes opositores, Henri Falcón, con los partidos Avanzada Progresista (AP), una porción de COPEI y el partido MAS, sí decidió concurrir. Dichas elecciones se caracterizaron por un cúmulo de ilegalidades e irregularidades desde su inicio, así como la firme posición de la comunidad democrática internacional de advertir que no reconocería sus resultados por no cumplir con los estándares internacionales. El resultado, nada sorprendente, fue la proclamación por parte del CNE del triunfo de Maduro.

Fue inesperada, sin embargo, la altísima falta de participación de la ciudadanía que, según las dudosas y seguramente adulteradas cifras oficiales, alcanzó el 53% del registro electoral, la más alta registrada en la historia electoral presidencial venezolana<sup>8</sup>. La segunda sorpresa ocurrió poco antes del anuncio de los resultados electorales por parte del CNE, cuando el candidato Falcón declaró que desconocería el resultado, por considerarlo irreal e ilegítimo, ya que el gobierno no había cumplido con los acuerdos de garantías electorales ofrecidos a éste. Poco después, el otro candidato, el evangélico Javier Bertucci, tomaba una posición similar. Con ello, la legitimidad que buscó Maduro para su reelección, apostando a hacerse con una oposición acomodaticia o leal, se esfumó.

Además de los partidos políticos opositores que han hecho vida en la MUD, o de la coalición de Falcón y Bertucci, un candidato evangélico,

han aparecido en años recientes algunas personalidades y organizaciones políticas disidentes del chavismo, que han buscado expresar políticamente una posición política chavista más no madurista. Algunos incluso sostienen que Maduro traicionó el legado del *comandante eterno*, pese a que fue directamente ungido por éste. Hasta la fecha han tenido poco éxito electoral, aunque han servido para ir visibilizando el descontento subyacente en el chavismo, y aportar a las fuerzas opositoras importantes análisis y reflexiones para la comprensión del madurismo y las redes de corrupción que hoy anidan en su seno. Han sido, al igual que las otras fuerzas opositoras, fuertemente reprimidas. Se cuentan en la disidencia ex ministros de Chávez y colegas militares, como el general Raúl Baduel, quien fuera ministro de la Defensa y lleva ya años preso acusado de corrupción, la ex fiscal Ortega, que junto a su marido, un diputado del PSUV, huyó del país y hoy vive en el exilio. Más recientemente, también se desarrolla en el seno del chavismo una depuración de sus cuadros para afianzar el liderazgo único de Nicolás Maduro, en su camino hacia el autoritarismo totalitario. Quizás los casos más emblemáticos de la purga en desarrollo lo constituyen, por una parte, la detención de ejecutivos de PDVSA, más de setenta, entre estos un presidente de la industria y otro presidente de CITGO, su filial en EEUU, acusados de corrupción. Rafael Ramírez, el más prominente ex ministro del Petróleo y de PDVSA, así como embajador de Venezuela ante la ONU hasta diciembre de 2017, manejaba su propia red de influencia y corrupción. Lo obligaron a renunciar y hoy se encuentra escondido en alguna parte del mundo. Por otra, el general Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de relaciones interiores, justicia y paz de Maduro, así como poderoso jefe de inteligencia de Chávez en varias oportunidades, hoy preso acusado de conspirador, es otro caso en cuestión.

## ¿Qué sigue?

A inicios de 2018, la mesa de negociación entre el gobierno y la MUD se reactivó con los auspicios del presidente de República Dominicana. Pero, como era esperable, la renuencia del gobierno de Maduro a conceder condiciones electorales razonablemente justas para las elecciones presidenciales entorpeció la posibilidad de arribar a un acuerdo. En los intercambios se presentaron tres documentos propositivos: uno por los

cancilleres facilitadores, incluyendo los que representaban intereses del gobierno, rechazado por los delegados gubernamentales; otro del gobierno, rechazado por los delegados de la MUD y un tercero de la MUD, que los delegados gubernamentales ni siquiera consideraron. Mientras la negociación discurría el 23 de enero, día que se conmemora en Venezuela la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, en la ANC, el vicepresidente del PSUV y hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, en una provocación pidió aprobar el adelanto de las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de 2018 (Guerrero, 2018).

La propuesta, sorpresiva e inconstitucional, fue aprobada, lo que alteró las condiciones del proceso de negociación, provocando el retiro de los delegados de la MUD. El gobierno, empero, logró en ese espacio algunos réditos políticos. Fiel a su objetivo de dividir a las fuerzas opositoras, esta jugada produjo tensión entre partidos y dirigentes opositores. Avanzada Progresista (AP), un partido pequeño en caudal electoral, resentido por considerar que los otros partidos más grandes no tomaban en cuenta el liderazgo de su dirigente Henri Falcón, mostró su desacuerdo con las posiciones tomadas por la MUD en República Dominicana y se apartó de la estrategia unitaria, aceptando conversar por su cuenta con el oficialismo. Poco después, AP, MAS y una fracción de COPEI, firmaron un acuerdo con éste para aceptar condiciones electorales similares a las presentadas en el documento del gobierno en República Dominicana, que la MUD había rechazado. Falcón inscribió su candidatura junto a Maduro y otros candidatos menores, en medio de una importante promoción por los medios de comunicación del gobierno. Para el oficialismo, la candidatura de Falcón podría darle a las presidenciales un barniz democrático ante el mundo. Como ya señalamos, la estrategia de Falcón culminó con el desconocimiento la noche del 20 de mayo de las elecciones realizadas por el incumplimiento del gobierno a los compromisos acordados.

Este episodio reveló, sin embargo, tendencias en los partidos opositores ya presentes desde al menos 2016: una oposición cuyos liderazgos no logran compartir un diagnóstico común de la situación por la que atraviesa la sociedad y, por ende, tampoco logran ponerse de acuerdo para obedecer estrategias de una dirección política unitaria. Los partidos pequeños, como AP, acusan a los grandes de tomar decisiones sin consultarles. Las mismas difíciles condiciones de penuria de la sociedad, la

sostenida y dura represión, prisión y amedrentamiento contra líderes y políticos opositores con popularidad, una represión que el gobierno ejerce selectiva y hábilmente - no tocando a algunos y ensañándose con otros garrotes y zanahorias en la mesa de negociación - todo ello propicia la debilidad y división de los sectores y actores sociales y políticos que buscan el cambio democrático, pero que no logran deponer sus diferencias en aras de ese bien común.

Hasta el momento de cerrar este artículo, y pese a constantes rumores de descontento en el sector militar, información de deserciones y encarcelamientos por insubordinación de oficiales, este actor continúa apoyando la deriva autoritaria y totalitaria del régimen. Las elites militares y civiles que rodean a Maduro disfrutan de un estatus de privilegios, prebendas e impunidad, que les ha permitido enriquecerse considerablemente en estos años. Muchos de ellos, además, habiéndose involucrado en negocios ilícitos, cuando no criminales, se mantienen leal al régimen, temerosos de que la salida de Maduro pudiera poner en riesgo sus fortunas, o los expusiera a juicios en instancias nacionales o internacionales. En los cuadros medios y bajos cunde el temor a represalias crueles y/o la necesidad de ese empleo, una situación económicamente precaria que comparten con la inmensa mayoría de la población.

El desencanto de la ciudadanía opositora por el desempeño de los actores políticos en estos años, bien por la falta de resultados de sus acciones, por las permanentes campañas de desprestigio a sus dirigentes desde el aparato mediático del gobierno, o por la recurrencia de comportamientos erráticos y/o mezquinos de parte de ellos, es ahora un componente a tomar muy en cuenta en la búsqueda de una estrategia global de acción política. También está el factor agotamiento o miedo de la ciudadanía, que por años se ha movilizad, sufriendo una creciente represión. Añádase a esto, la desconfianza a un CNE y al instrumento electoral como medio para alcanzar el cambio político democrático y en paz. Está además el control social que viene ejerciendo el gobierno sobre la población mediante mecanismos de distribución de bienes, especialmente comida, a través de los CLAP y el Carnet de la Patria. Todo esto dibuja un panorama nada alentador para una estrategia opositora unitaria efectiva.

En mi criterio, el reto hoy de quienes resisten la embestida dictatorial, es alcanzar visiones amplias y lo más unitarias posibles, para trascender

el hecho electoral, buscando la participación de resistencia y lucha en múltiples espacios públicos e institucionales. Las elecciones sin garantías no pueden ser asumidas como si fueran legítimas, o como si fueran ganables; pero pueden ser pretexto, un recurso táctico para seguir exponiendo a Maduro, como sucedió con las presidenciales del 20 de mayo, al escarnio nacional e internacional, desnudando la naturaleza tiránica de su ejercicio del poder, su crueldad e incapacidad. Así también, negociaciones y conversaciones deberán continuar, exigiendo a quienes se sienten en esos espacios seriedad, desprendimiento de intereses tacaños, profesionalismo en este campo, pues no se pueden alcanzar beneficios para la población sin preparación y asesoramiento. Salvo en la última ronda de negociaciones este 2018, los partidos opositores se presentaron a estas citas de manera improvisada, dividida y sin asesoramiento. Las experiencias en otros países, si algo han mostrado, es que las conversaciones y negociaciones son necesarias, pero demandan paciencia, preparación, inteligencia y creatividad. Hay que aguardar por el momento oportuno. Con relación a esto, véase el artículo de Francisco Alfaro sobre los procesos de diálogo, también contenido en este número especial.

Los próximos meses serán de urgente necesidad de articulación de actores nacionales, partidos, ONG, organizaciones sociales y comunitarias. Así como de construcción de un tejido social desde abajo, más tupido, más diverso social y generacionalmente, de múltiples identidades, que asegure un piso amplio de respaldos políticos por la democracia, sus valores y prácticas, más sólido y firme que el habido hasta ahora. Un tejido que presione a los partidos, los apoye y exija unión y rendición de cuentas. Las condiciones socioeconómicas actuales, tan inhumanas, favorecen la ineficacia de la política polarizadora que ha marcado a Venezuela desde 1998. Un discurso y una narrativa nacional alternativa a la discriminación, a la ofensa y violencia, a la esquizofrenia y disociación de la realidad del discurso oficial son también urgentes como parte de la reunificación y sanación de la nación.

Las articulaciones deben darse también con la comunidad democrática internacional, cuya presión ha venido creciendo eficazmente en los meses de 2018. Una sintonía de lo nacional con lo internacional hace más fuerte la lucha y da un poco más de seguridad a quienes se exponen en Venezuela al régimen dictatorial. La contribución de actores

como el secretario de la OEA, el Grupo de Lima, la Unión Europea, los gobiernos de Canadá, EEUU y Colombia en los tiempos recientes, puede considerarse invaluable y debiera seguir así, para lo cual hay que cultivar y cementar las relaciones con gobiernos, parlamentos, agencias interamericanas y mundiales y demás organizaciones que hacen vida en ese nivel. Una vinculación más estrecha de lo nacional con lo internacional, procurando articular las acciones y sanciones que se le vienen imponiendo a funcionarios del gobierno de Maduro por su involucramiento en negocios ilícitos o violaciones de DDHH, con las internas conducidas en el país por una dirección política que logre darle norte a la inmensa energía social que hoy se expresa en permanentes acciones colectivas, dispersas y anónimas.

La AN, el espacio institucional liberado en 2015 de la subordinación a la cúpula militar y civil que gobierna con Maduro, es el bastión institucional clave de la lucha y de la resistencia. También lo es la Iglesia Católica, sus obispos y organizaciones; los gremios, sindicatos, academias, universidades, intelectuales, el movimiento estudiantil. Diversas ONG y organizaciones sociales que denuncian, registran y protegen a la ciudadanía ante un gobierno que opera por fuera del Estado de Derecho. En tiempos de dictadura, la creatividad de todos se hace más necesaria que nunca, y es preciso producir acciones simbólicas, que refuercen la moral de quienes apoyan y alimenten el movimiento nacional por la democracia, impulsen acciones que eduquen en valores ciudadanos, que contrasten y denuncien la ilegitimidad de las autoridades que hoy gobiernan Venezuela. Consultas populares, autoridades paralelas, medios de comunicación alternativos, aulas abiertas para la enseñanza de historia, cultura política, denuncias sobre violaciones de DDHH en instancias internacionales, todo lo que permita a los venezolanos que luchan por las libertades saber y sentir que no están solos, que pertenecen a un movimiento que crece. El poder es el que está cada vez más solo, Maduro y su conjunto de tribus militares y civiles, pegados como sanguijuelas al aparato del Estado, chupando hasta destruir las bases y recursos de la república.

Aunque a lo interno el poder continúa su marcha hacia la consolidación de un régimen autoritario y totalitario, no pareciera tenerla fácil. Mucho descontento entre sus cuadros militares y civiles de niveles medios y bajos insinúa que el bloque de dominación viene fisurándose. En

mayo arreciaron los encarcelamientos y las bajas. Abona la evidencia de que no pueden, quieren o saben resolver la catástrofe económica y social que engendraron. Son más vulnerables de lo que parecen. Es importante entonces comprender la realidad actual y las posibilidades de acción en ella, sin fantasías. Ser creativos y llamativos en la resistencia y confrontación no violenta. El sacrificio lo merece, por el país que queremos y merecemos ser.

## NOTAS

1. Puede verse mi CV en <http://margaritalopezmaya.com/>. Allí puede accederse a artículos académicos o de difusión en las redes, sobre todo los más recientes.
2. En este aparte me apoyo en López Maya (2018), actualizando algunos datos.
3. Las cifras OPEP pueden verse en <http://efectococuyo.com/economia/produccion-de-pdvsa-acumula-dos-anos-en-declive-y-su-produccion-cae-a-1-837-000-barriles> y en [http://www.el-nacional.com/noticias/petroleo/produccion-petrolera-venezuela-cayo-diciembre-2017\\_219274](http://www.el-nacional.com/noticias/petroleo/produccion-petrolera-venezuela-cayo-diciembre-2017_219274).
4. Ver portal <http://cambiolivar.com/dipro-dicom/>.
5. Entre las varias fuentes en esta materia puede revisarse el blog <http://maibortpetit.blogspot.mx/>; y los portales Runrunes: <http://runrun.es/> y Efecto Cocuyo: <http://efectococuyo.com/>.
6. Esta secuencia de hechos histórico-coyunturales la he tomado de varios artículos de mi autoría publicados esos años en PolitikaUcab y Prodavinci, que se pueden ver en <https://margaritalopezmaya.com/articulos/>.
7. Alfredo Romero, director ejecutivo Foro Penal (twitt 26-05-2018, #26Mayo).
8. Ver mi artículo <https://prodavinci.com/que-esperar-luego-del-20m-b/>.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- García Marco, Daniel (2016), “Una pena de muerte disimulada”: la polémica Operación de Liberación del Pueblo, la mano dura del gobierno de Venezuela contra el crimen”, *BBC*, 28 de noviembre de 2018, <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38126651>
- Informe21.com (2018). “Cáritas de Venezuela atendió en 2017 el doble de niños desnutridos que en 2016”, 8 de enero de 2018, <http://informe21.com/politica/caritas-de-venezuela-atendio-en-2017-el-doble-de-ninos-desnutridos-que-en-2016>.
- El Nacional (2018). “Escasez de medicamentos alcanzó un punto crítico”, 23 de enero de 2018, [http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/escasez-medicamentos-alcanzo-punto-critico\\_219679](http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/escasez-medicamentos-alcanzo-punto-critico_219679).
- España, Luis Pedro, y Ponce, María G. (2018). “Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela”, UCAB, LACSO, Febrero 2018, <https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ENCOVI-2017-presentaci%C3%B3n-para-difundir.pdf>.
- Guerra, José (2018): “La inflación superará el 100.000% al cierre del año”, *El Nacional*, 9 de julio, en [http://www.el-nacional.com/noticias/politica/jose-guerra-inflacion-superara-100000-cierre-del-ano\\_243294](http://www.el-nacional.com/noticias/politica/jose-guerra-inflacion-superara-100000-cierre-del-ano_243294).
- Guerrero, Kay (2018). “Venezuela: ¿dos por uno? Diosdado Cabello pide adelantar elecciones presidenciales y parlamentarias”, 21 de febrero de 2018, <http://cnnespanol.cnn.com/2018/02/21/venezuela-dos-por-uno-diosdado-cabello-pide-adelantar-elecciones-presidenciales-y-parlamentarias/>
- Hernández, José Ignacio (2018). “Steven Levitsky: La democracia en Venezuela está muerta”, 2 de marzo de 2018, <https://prodavinci.com/steven-levitsky-la-democracia-en-venezuela-esta-muerta/>.
- López Maya, Margarita (2005). *Del viernes negro al referendo revocatorio*. Caracas, Grupo Alfa (reediciones 2006 y 2016).
- López Maya, Margarita (2016). *El ocaso del chavismo. Venezuela 2005-2015*. Caracas, Grupo Alfa.
- López Maya, Margarita (2018). “Venezuela: entre anhelos de cambio y la catástrofe” <https://prodavinci.com/venezuela-entre-los-anhelos-de-cambio-y-la-catastrofe/>.

- Monedas de Venezuela (2017). “Cronología: Devaluación del Bolívar, desde J.V Gómez hasta N. Maduro”, 29 de junio 2017, <http://www.monedasdevenezuela.net/articulos/cronologia-de-la-devaluacion-del-bolivar-venezolano/>
- OVV (2018). “Informe OVV de Violencia 2017”, 5 de enero de 2018, <https://observatoriodeviolencia.org.ve/informe-ovv-de-violencia-2017/>.
- Provea (2018). “Informes Especiales. Investigaciones temáticas de Provea junto a otras Organizaciones sobre la situación de los DDHH en Venezuela”, <https://www.derechos.org.ve/informes-especiales>.
- ULA-IDH (2018). “*Carnet de la Patria*” y otros medios de exclusión social por razones políticas. Mérida, Instituto de Derechos Humanos, <http://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2018/03/informe-web.pdf>.
- Provea (2018). “La muerte y la violencia asedian a 14.525 privados de libertad”, 15 de febrero de 2018, <https://www.derechos.org.ve/actualidad/la-muerte-y-la-violencia-asedian-a-14-525-privados-de-libertad>.

## RESUMEN

### El colapso de Venezuela ¿qué sigue?

En este artículo busco, por una parte, mostrar con datos y cifras confiables, la situación socioeconómica catastrófica que sufre la sociedad venezolana, que enmarca y condiciona la crisis política. En segundo lugar, exponer los principales y más recientes desarrollos políticos que describen, tanto el continuo avance del carácter autoritario del régimen y su vocación totalitaria, como las características del proceso electoral presidencial fraudulento que se realizó el 20 de mayo de 2018. En una tercera parte, reflexiono sobre posibles estrategias y acciones que podrían favorecer una transición democrática. Este ensayo está sustentado en una larga investigación sobre el proceso sociopolítico venezolano, que inicié en los años noventa del siglo pasado. Resultados generales de esta pesquisa pueden revisarse en dos libros (López Maya, 2005 y 2016) y en numerosos artículos académicos. Lo que aquí presento es un estudio de coyuntura, que permita una visión holística de la situación de Venezuela hacia mediados de mayo de 2018.

## ABSTRACT

**The Collapse Of Venezuela. What's Next?**

In this article, I seek to show with reliable data and figures the catastrophic socioeconomic situation that the Venezuelan society is suffering, which frames and conditions the current political crisis. Secondly, I seek to expose the main and most recent political developments that describe both the continued progress of the regime's authoritarian character and its totalitarian drive, and the characteristics of the fraudulent presidential electoral process undertaken on May 20, 2018. Thirdly, I reflect on possible strategies and actions that could favor a democratic transition. This essay is underpinned by long term research on the Venezuelan sociopolitical process, which I started in the 1990s. General research results can be reviewed in two books (López Maya, 2005 y 2016) and in a number of academic articles. What I present in this essay is a circumstantial study, which allows a holistic vision of the Venezuelan situation around May 2018.

## SUMMARIO

**O colapso da Venezuela. O que virá?**

Neste artigo procuro, por um lado, mostrar, com dados e cifras confiáveis, a situação socioeconômica catastrófica que a sociedade venezuelana enfrenta, situação que demarca e condiciona a crise política. Em segundo lugar, expor os principais e mais recentes acontecimentos políticos que descrevem tanto o contínuo avanço do caráter autoritário do regime, e sua vocação totalitária, quanto as características do processo eleitoral presidencial fraudulento que foi realizado em 20 de maio de 2018. Em uma terceira parte, reflito sobre possíveis estratégias e ações que poderiam favorecer uma transição democrática. Este ensaio está sustentado em uma larga investigação sobre o processo sociopolítico venezuelano, que iniciei nos anos 90 do século passado. Resultados gerais desta pesquisa podem ser conferidos em dois livros (López Maya, 2005 e 2016) e em numerosos artigos acadêmicos. O que aqui apresento é um estudo de conjuntura que permite uma visão holística da situação da Venezuela em maio de 2018.

